

La política en las calles: La cultura política y sus circunstancias

Gonzalo Rojas Ortuste
JUNIO 2011

- Presentamos a continuación un conjunto de apuntes conceptuales situados en contexto histórico para perfilar la “política en las calles” como una característica central de la cultura política de Bolivia. Se muestra además sus ventajas y desventajas en una perspectiva de afianzamiento democrático, para luego concentrarnos en su presencia en la época contemporánea, especialmente en la era del Movimiento Al Socialismo (MAS), incluyendo aquello que ya no puede considerarse la fuerza monopólica de la expresión de los llamados movimientos sociales, que en algún momento parecían totalmente subordinados (o al menos apoyando entusiastamente) a esa fuerza política. Hacia el final, se retoma cierto talante teórico y valorativo para pensar prospectivamente nuestra actual circunstancia con la política de las calles, conociendo que las dificultades de gobernabilidad han regresado con fuerza. Por ello, abandonar el exitismo de retórica revolucionaria será requisito para la lucidez democrática, como exigencia de propuesta de un orden contemporáneo equitativo (que aquí significa también intercultural). Por ello también, en general, se recurre a un estilo ensayístico y desenfadado, para evitar la queja de la frustración.



Contenido

1.- Apuntes conceptuales: méritos y deméritos de la política de las calles.....	3
2.- Las dos fases recientes.....	5
3.- La ilusión inicial y la colonización de los movimientos sociales	7
4. El desencanto: Gasolinazo y después.....	9
5.- Prospectiva: Inercia e incidencia	11
6. Referencias. Bibliográficas.....	13



1.- Apuntes conceptuales: méritos y deméritos de la política de las calles.

Si entendemos a “la política en las calles” como una tendencia a la protesta y “acción directa” presente en cierto tipo de sociedades (“repúblicas tumultuosas”, diría Maquiavelo), inmediatamente nos colocamos ante un escenario conocido para los lectores cercanos, el boliviano.

La expresión “política en las calles”, algo más acotada y de alusión más urbana (ciudad de La Paz, principalmente), la empleó Fernando Calderón a comienzos de nuestra etapa democrática en los 80s pasados, quien luego la va ampliar hasta completar el siglo en un enfoque sociológico donde la modernización es un concepto clave junto al dato de la globalización (Calderón y Szmukler 2000). Al igual que la autora argentina que citamos a continuación (nota 1), uno y otro trabajo tiene al concepto de “esfera pública” de la propuesta de Habermas a la vista. Las referencias conceptuales aquí aludidas (estructura sociológica y modernidad) reaparecerán con nitidez hacia el final del trabajo, aunque están presentes de manera no siempre explícita en todo el documento.

En la historia moderna del país se han ido perfilando unos tipos de acción política de un abanico amplio de opciones. Esta clase de acciones tiene ciertas continuidades con acciones del pasado que van figurando una cierta “personalidad” colectiva. Desde finales de siglo XVIII e inicios del XIX hubo dos movimientos de envergadura, la movilización de Tupac Katari y la del proceso independentista, que luego de la agitación ideológica que irrumpió en 1809 y 1810 devino en lo que se conoce como “guerra de las republiquetas”, guerrillas de pequeños destacamentos con altos grados de autonomía y cierto control territorial. Más que grandes ejércitos, este segundo momento fue abono para afianzar caudillos de relativamente pocos seguidores con contacto personalizado con ese comandante. Constituida la República, esta tendencia ha de continuar manifestándose, principalmente luego de la derrota del proyecto del Mcal. Andrés de Santa Cruz alrededor de figuras de militares, que con el desarrollo social ya no será de huestes armadas, sino con bases de apoyo social de sectores sociales,

como los que nítidamente sostuvieron a una figura como Isidoro Belzu a mediados de ese azaroso siglo. Sólo la derrota de la Guerra del Pacífico va dar cierta estabilidad por un par de décadas a los gobiernos subsecuentes, hasta la siguiente crisis de dimensiones, con movilizaciones armadas a finales del XIX, la denominada “guerra federal”, donde el clivaje regional vuelve a hacerse visible como antes con las republiquetas¹.

Como no nos interesa aquí el detalle histórico, sino la perspectiva que permite entender cierto tipo de sedimentaciones que devienen hábito, digamos que con el triunfo de la Revolución Nacional en 1952 la tendencia de cierta autoorganización de los sectores populares (“las masas”, en una de nuestras caras tradiciones narrativas) y el uso de la protesta se van a constituir en unos de los expedientes más socorridos para conseguir la atención del gobierno en funciones. La historia sociopolítica de este país registra al sindicalismo de los trabajadores mineros como intensamente adoctrinado (anarcosindicalista y comunista) en los 30 y 40 del siglo XX, resultado de lo que (evocando a Zavaleta) podemos llamar la “disponibilidad ideológica” producida por el impacto de la crisis que generó la Guerra del Chaco. Desde 1952, la Central Obrera boliviana (COB) ha sido el referente organizativo y político de los sectores asalariados y, más adelante, con el azaroso retorno de la democracia, a finales de los 70s, se incorporaron los campesinos e indígenas organizados con clara orientación política, a través de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia² (CSUTCB).

En el periodo de 1985 al 2000, luego de un despliegue de “política en las calles” en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP, 1982-85), hay un relativa contracción de este tipo de recursos y, consecuentemente, una mayor preeminencia de

1 Es para la segunda mitad del siglo XIX que la historiadora Hilda Sábado usa en la década del noventa del siglo pasado la expresión de “política de las calles” justamente para describir situación de movilización e inestabilidad en la vecina Argentina. Desde luego que tal expresión, y lo que connota, podría muy bien servir para el siglo XX e inicios del XXI argentino también, como lo usamos en nuestro caso.

2 Ver al final el significado de las siglas usadas.



formas más institucionales del conflicto social, dado que la dimensión específicamente política se resuelve principalmente en la configuración de mayorías en el Congreso Nacional (de ahí la atención a esa mayoría a formar, que ha dado lugar al denominativo de “democracia pactada” que se identificaba como sinónimo de “gobernabilidad”).

Veremos más adelante cómo el MAS capitaliza nuestro inicio político del siglo XXI retomando esa peculiar forma de acción política, que desde luego tampoco es ajena en el vecindario continental ni mundial, aunque aquí lo usemos preferentemente.

Es así que esta nítida orientación hacia un tipo de acción, la movilización de sectores que implica despliegue corporal y gestual es un ritual que nos es familiar, en un repertorio que tiene cierta renovación³: declaraciones altisonantes, cánticos y estribillos en las marchas, frazadas y bolsas de coca en las huelgas de hambre⁴ y torsos desnudos e improvisadas cruces en las crucifixiones. Las referencias al simbolismo no deben en ningún caso hacernos olvidar de que esos cuerpos ofrendados en la contienda política están, efectivamente, expuestos a ser vulnerados sea por efecto de la propia medida, sea por la acción policial y a veces militar con la cual se reprime desde las instancias estatales esas expresiones.

Pero también hay la disposición al enfrentamiento: digamos que opera un razonamiento simple como el siguiente, “estamos protestando legítimamente, si nos provocan nos defendemos...”. Desde luego también ocurre, aunque con mucho menos frecuencia de lo que podría esperarse, algún roce o entrevero con otros ciudadanos, especialmente por aquellos que se sienten afectados por los bloqueos o marchas. Es decir, la posibilidad de violencia está siempre latente y no son pocas las veces que se concreta.

3 “Paro movilizad”, “toma pacífica” (de instalaciones ajenas) y similares son, a juicio de Javier Medina, expresiones de la influencia de la cosmovisión indígena en Bolivia, ejemplos de la lógica del tercer incluido.

4 En otros contextos esta medida suele presentarse como puramente pacífica y ascética. No es el caso en Bolivia, donde incluso relevos son programados para aminorar riesgos de sus protagonistas.

Ya en la evaluación de esta tendencia es necesario reconocer sus claroscuros. Indudablemente, la “política en las calles” ha tenido el mérito de no permitir dictaduras longevas, que no son extrañas en el ámbito latinoamericano, ni sudamericano. En limpio, esa rebeldía no permite dictadores de largo aliento.

No obstante también ha generado limitaciones como la ausencia de una institucionalidad eficiente y responsable, que tendría que haber sido construida en periodos que exceden el plazo de los gobiernos de turno. Hay actividades del repertorio de la política en las calles que son particularmente invasivas de los derechos de quienes no están participando en los reclamos, como los bloqueos (de calles o caminos) que atentan a otros derechos (libre tránsito).

Es significativo que cuantos más recursos de la política de las calles están presentes, mayor es la percepción de vigor del polo popular en el escenario del poder. Del mismo modo, cuando la presencia de medios institucionales es la predominante, existe la percepción de que el polo no-popular es el detentador del mayor poder. Como sabemos desde Maquiavelo (2004), que se dolía de su natal Florencia con tal característica, esto ocurre en un contexto de polarización social entre un grupo minoritario y poderoso, y otro mayoritario pero principalmente sometido. Una caracterización tal deja como evidente aspiración un orden más republicano, de cierta igualdad básica entre los actores sociales y políticos.

La evidente consecuencia de la vigencia de esas percepciones es que el círculo se retroalimenta: la muy débil institucionalidad abona la recurrencia a las demandas “hasta las últimas consecuencias” (huelgas, bloqueos y movilizaciones) y nunca se implanta una institucionalidad capaz de responder las demandas a veces elementales y legítimas. Así, mientras se perciba como más improbable que se atiendan las demandas por la vía de la “solicitud por canales correspondientes”, más probable es que se salten el paso formal para pasar a la “acción directa”, la política en las calles.

Junto a la presencia de caudillos, la política en las calles es probablemente el toro rasgo que mejor



explica la debilidad de la construcción institucional. El telón de fondo donde esas características destacan son los bajos rendimientos de las políticas públicas —cuando existen— para abandonar la pobreza en términos sociales y económicos. En verdad unas y otras de estas formas que distinguen el panorama sociopolítico boliviano están fuertemente vinculadas y se refuerzan entre sí. Por ello, modificarlas exitosamente implica actuar sobre ellas más o menos simultáneamente, para que las que se mantienen intocadas o sin mayor modificación no refuncionalicen a las otras. Es importante insistir que no estamos postulando aquí otra “revolución” que aspire ilusamente a cambiar todo desde la nada, despreciando los logros previos —así sean éstos modestos—, sino reformas y ajustes que transformen la energía social en institucionalidad democrática eficaz y eficiente, incidiendo inteligentemente allí donde es preciso. Volveremos a estas reflexiones con ciertas proposiciones hacia el final del ensayo.

2.- Las dos fases recientes

Es indudable que el MAS fue exitoso en la política de las calles como recurso de presión y visibilización en el periodo 2000-2005 (“guerra del agua”, “febrero negro”, “guerra del gas”, etc.). Claro que entre 2000 y 2002 compartió protagonismo con el liderazgo del Felipe Quispe, “el Mallku” (Rojas O. 2001), que consiguió cinco curules en la legislatura 2002-2005 del Congreso Nacional. En ese entonces, la figura de Felipe Quispe representaba el ala más radical de la política y del discurso de la reivindicación indianista, o al menos la que demandaba más fuertemente el reconocimiento de la presencia de pueblos indígenas en la escena política nacional. La política de las calles no era, desde luego, su única ni principal arma en un momento en que la debacle del sistema político partidario era evidente.

Mientras que durante la época más estable de la “democracia pactada” (1985-1999) eran dos de los tres principales partidos (MNR, MIR y ADN) los que se aliaban y gobernaban (el restante quedaba encabezando la oposición); ya no fue el caso desde 2002, cuando esas tres agrupaciones recurrieron a una sumatoria de siglas partidarias que apenas alcanzó para conformar la mayoría necesaria en el

parlamento.

Con Carlos Mesa de Presidente sin partido, luego de la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, el periodo de turbulencia nos recordaba aquellos años difíciles del inicio de la democracia a comienzos de 1980, con el acecho de la ingobernabilidad.

Pasado el impacto y la general aceptación de la ascensión a la Primera Magistratura de Evo Morales, los resultados de las elecciones para elegir los asambleístas a la Constituyente en 2007 activaron las movilizaciones políticas de la llamada “media luna” del país. Los departamentos de tierras bajas (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) replicaban en gran medida la diferencia de apoyo del Presidente Morales entre las tierras altas (su bastión) y las bajas (con apoyos menores). Inmediatamente al dato numérico de los apoyos, hay que añadir que la oposición se expresaba también en términos de correlaciones de poder, pues las organizaciones que representan a los pueblos indígenas en esos departamentos, además de nuevas en términos comparativos, se confrontaban con sectores dominantes hasta hace poco habían hecho gala de intolerancia (Cfr. el buen recuento de Bustos 2011, también Argirakis 2010).

Se volverá más adelante (apartado 4) a esa confrontación —donde se evidenciaban las dos perspectivas básicas con asentamientos regionales diferenciados— que sirvió para que la amplia base social que apoyó al proyecto que encabeza el MAS se presente sin fisuras.

Lo cierto es que durante esa fase, la política en las calles se dio principalmente en tierras bajas —además de un territorio de occidente en disputa: la ciudad de Cochabamba— y alcanzó su cima en septiembre de 2008, cuando con la ilegal toma de reparticiones del gobierno nacional en las capitales departamentales, se precipitó la legitimidad del reclamo de esas regiones⁵ que hasta entonces fueron

5 Durante ese periodo se crearon efímeramente sendas organizaciones “paraguas” para aglutinar sectores afines al MAS como la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), incluido o articulado con el sonoro “Estado Mayor del Pueblo” y el Consejo Nacional Democrático



mayormente legales y contaban con el apoyo de la opinión pública de esos departamentos.

Durante la realización de la Asamblea Constituyente (2007-2008) se conformó el denominado “Pacto de Unidad”, que aglutinó a las representaciones de los pueblos indígenas y campesinos que casi inercialmente veían en el MAS la fuerza política en que debía apoyarse, desde que su principal base social es un sindicalismo campesino muy combativo, el de los cocaleros, y la inevitable aureola de ser los nuevos ocupantes del Palacio Quemado en La Paz. Se ha referido insistentemente que allí, en esa alianza, se habría redactado el borrador (por ej. Viaña 2011 y Mayorga 2007) de lo que con acuerdos políticos logrados en el límite y con representación de los partidos de la oposición en el Congreso Nacional devendría la actual Constitución. Allí seguramente surgió el ensamblaje del “IOC” (indígena originario campesino), cuya presencia en el texto constitucional no tiene precedentes en nuestra historia y dan lugar a la plurinacionalidad, por aquello de que esos pueblos y etnias devienen “naciones” (maximalismo del lenguaje...).

La realidad es menos dúctil que los denominativos. Hoy sabemos por las disputas en el seno de la coalición que “indígenas” no son idénticos a “campesinos”, aunque desde luego no negamos cierta coincidencia parcial que en general tiene que ver con el lugar de residencia (rural) y la actividad económica basada en recursos naturales renovables en un sentido muy amplio.

A mediados de 2010, con la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), antiguos aliados como la ONG CEJIS (de la que fue parte el actual ministro de Gobierno (hasta junio de Autonomías), Carlos Romero, y el ex Viceministro de Tierras, A. Almaraz) y el Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Fobomade) fueron acusados de desestabilizadores y enemigos del proceso.

El senador Avalos, exsecretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) encabezaría una tendencia “campesinista” que abogaba por la

(Conalde) de la oposición regional.

propiedad individual de la tierra, a contramano de la Ley de Reconducción Comunitaria aprobada en el primer periodo del Presidente Morales, que se supone es la política pública del actual gobierno⁶. Las referencias a estas ONGs tienen significación porque de allí provienen los personeros de Gobierno más calificados en gestión. Es posible discrepar con sus enfoques, desde luego, pero difícilmente se puede negar el compromiso político-ideológico y conocimiento de sus temas, mucho mayor que la mayoría de los assembleístas del oficialismo (y en general, también de la oposición).

En el caso de tierras bajas —un territorio con menor densidad poblacional de pueblos indígenas y donde desde mediados de los 90s se otorgaron importantes superficies de Tierras Comunitarias de Origen (TCO)— han ocurrido denuncias como las de indígenas de la reserva del Choré (cerca a la “frontera” entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz) donde los cultivos de hoja de coca estarían invadiendo esta reserva ecológica, sin que suceda ninguna restitución de derechos de los afectados y sólo evitándose la confrontación abierta entre cocaleros e indígenas. Por añadidura, el Presidente Morales acaba de inaugurar los trabajos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesará Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécore (TIPNIS) que afectará a los indígenas.

En el caso de sectores asalariados, es claro que los de educación y salud, por razones de reproducción de la población, tienen trato especial, incluida la referencia constitucional que para la educación afirma que se “constituye función suprema y primera responsabilidad financiera” (Art. 77.I). Ya no tan claro es el tratamiento especial de las fuerzas armadas y la policía, como no sea asegurarse la lealtad al régimen de tales sectores, cruciales para enfrentar a los díscolos políticos.

En la COB, tradicionalmente obrerista en discurso

⁶ Una publicación oficial del INRA en separata (Somos Tierra, Nro. 13, julio 2010) incluye detalladamente las organizaciones indígenas y campesinas, además de los antiguos “colonizadores” (CSCB) ahora denominados “comunidades interculturales”, a partir de lo que se diferencian el tipo de concesiones y propiedad.



e ideología (al punto de que ni siquiera ahora se discute que su secretario ejecutivo deba ser siempre un dirigente minero, pese a su reducido número de afiliados en comparación a otros sectores), ha estado mayormente subordinado al MAS, con pocos momentos de contradicción y sin iniciativa política, pese a su larga trayectoria de “independencia sindical y clasista”. Recién con la reacción popular al gasolinazo ha recobrado su visibilidad y ha tenido gestos de presión al Gobierno. La explicación de fondo de su apoyo al MAS está en las primeras medidas políticas de importancia del MAS, casi las únicas en términos estructurales y que recogen su vena nacionalista (en verdad estatista), como por ejemplo la llamada nacionalización del gas en mayo de 2007 y la consiguiente revitalización de YPF y la tradición del programa estratégico del sindicalismo boliviano desde hace más de medio siglo. Aunque la llamada nacionalización en este caso es mayormente una renegociación de contratos en términos más favorables para el Estado boliviano.

Con la reelección del Presidente Morales a finales de 2009 parecía haberse cerrado el ciclo de la política en las calles, que como hemos advertido en páginas previas implica un no muy explícito derecho de indignación ante los poderosos. Por ello fue que las elecciones subnacionales de abril del 2010 (para conformar autonomías departamentales, municipales y unas pocas indígenas), aunque el MAS creció en su influencia territorial, se mostró sorprendido —según la muy expresiva evaluación que el Presidente hizo el día mismo de esa votación⁷— de no haber arrasado en todas las plazas importantes, incluidas las capitales de La Paz y Oruro, que hasta entonces parecían parte de sus bastiones.

En la simplificada mirada de los recién llegados al poder sólo en la extinguida Media Luna no eran queridos todavía. En todo el resto de nuestro extenso país, el entusiasmo revolucionario acompañaba al MAS y su adalid. Creyeron (por muy largo tiempo) que vencer (en Dic. 2009) era convencer. Vale la pena ver con algún detalle esa ilusión.

⁷ Donde más que sus palabras importaban sus gestos corporales y faciales.

3.- La ilusión inicial y la colonización de los movimientos sociales

Hay dos dimensiones de esa ilusión inicial. La primera, la de pensar que el nuevo Gobierno era la encarnación de los movimientos populares, esa sensación de que se había alcanzado el triunfo de una revolución (ahora sí, definitiva). Luego de la victoria del MAS en 2005 y el inicio de su gobierno en 2006, había una grande expectativa en que había llegado “la hora feliz” de nuestra historia contemporánea. Para decirlo de manera contundente, nadie se planteaba ser oposición — en el sentido fuerte— en tal circunstancia. No se me escapa que formalmente existía unas fuerzas políticas que representaban a una parte importante del electorado cuya opción electoral no había sido el MAS, pero considero que existía una expectativa de que se cerraba un periodo de alta inestabilidad y se abría otro con novedades que más bien se presentaban auspiciosas. Recordemos de nuevo que entre 2000-2005 el entonces diputado Evo Morales y el MAS no representaban el ala más radical del espectro político boliviano. Lo que podemos llamar izquierda democrática, o centro izquierda —para usar estos referentes cada vez más caducos— estaba simplemente fascinada con la victoria del líder cocalero.

La otra dimensión comprende ese “alivio” que sintieron algunos miembros de sectores que no necesariamente apoyaban la Presidencia de Evo Morales, pero aceptaban que ganó con las reglas de juego. Pensaban que con su triunfo se “controlaría” el amenazante desborde de reclamos y movilizaciones que precipitaron la renuncia de Carlos Mesa y se dieron lugar al interinato de Rodríguez Veltzé en 2005.

La descripción que antecede es importante para entender la fuerza de la interpelación de la temática indígena considerada como issue, como el tema axial no sólo de la coyuntura, sino de la estructura social boliviana. Sólo esta extendida percepción explica por qué pudo ser largamente exitosa la lealtad de los movimientos sociales con el MAS y la figura del Presidente Morales, que se ven como los abanderados triunfantes de la reivindicación indígena.



El MAS y su insistencia en querer ser “Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos” (IPSP), sin mayor elaboración mayor, se presentaba como una federación extraordinaria de fuerzas populares de indudable orientación progresista más que un partido político, sumada a la esforzada construcción del Presidente Morales (“hermano Evo”) como novedad histórica reforzaron visiblemente esta preeminencia que marca, en efecto, un hito en el proceso político boliviano.

En la abundante bibliografía sobre movimientos sociales, estos son siempre parte de la sociedad (civil) que aunque impugne al Estado y quiera transformarlo, no propugna ser esa macroinstitución. La separación entre sociedad política y civil es parte de las características de época de la modernidad y, aunque se pueda denunciar eso como alienante, plantear un Estado de los movimientos sociales significa la estatalización de la sociedad —o de su parte más vibrante— o la desaparición del Estado en la sociedad. La primera corresponde a una visión no sólo autoritaria, sino totalitaria (además de inviable); mientras que la segunda es de un anarquismo ingenuo que no se conduce de la realidad mundial, donde el Estado sigue siendo actor protagónico, aunque ciertamente compartiendo de manera creciente con otras instancias el escenario internacional.

Vale la pena considerar un planteamiento muy cercano al que estamos objetando nosotros. En un trabajo reciente, precisamente sobre el periodo y los actores que estamos abordando aquí, con notable cuidado en las referencias y cronología, además de una evidente simpatía por el proceso político, pero también con aperturas críticas, se plantea la tensión entre hegemonía (político ideológica) y autonomía (de los movimientos sociales) (Viaña 2011: 50). Reconocida como difícil y problemática, el autor se decanta por la apuesta voluntarista de buscar el equilibrio o vigencia de ambas.

En nuestra perspectiva, el poder de quienes se sienten portadores de una verdad histórica (en este caso los funcionarios de gobierno-partido más ideológicos que sensibles a las necesidades de convivencia) tenderá a buscar su expansión, lo cual podría interpretarse erróneamente como fatalidad, pero si se desarrollan mecanismos institucionales

para limitar el poder de los políticos es evitable. Si existe un amplio acuerdo que el mercado (capitalista) debe ser limitado y supervisado, lo mismo vale para la dimensión estatal. Trotsky escribió que el revolucionario aspira al orden luego de tomar el poder. Si ésta es la tendencia, consolidar un orden de cosas favorable a los recién llegados, hacerlo sostenible y con legitimidad, exige universalizar un orden de derechos compatibles entre las partes; reconocer derechos a los otros, incluidos los derechos políticos; y limitar la concentración en un solo hombre u órgano. Veremos en el último apartado cómo es preciso desarrollar esos recaudos para que la energía desplegada en la política en las calles tenga una utilidad más allá del embeleso efímero de haberse jugado la vida en un solo instante.

Más que hegemonía (que implica a un actor político), postulamos aquí un tipo de creencia republicana generalizada, un orden democrático como “piso” de época mundial, así como la inobjetable convicción de los derechos de los pueblos indígenas (y sectores populares) a un mejor reparto en la distribución de los bienes sociales (económicos) puesto que los derechos políticos (y simbólicos) se los estarían ganando ya. En nuestra circunstancia se requiere una referencia más explícita en lo que hace a las identidades culturales, puesto que estamos revirtiendo un legado de colonialismo⁸ y las limitaciones de un orden económico que no ha sido capaz de erradicar la pobreza de amplios sectores populares.

Hemos descrito en el apartado anterior, marcando las diferencias entre la retórica y las concreciones, la situación de los actores sociales emblemáticos del actual proceso: los indígenas y campesinos. No hay por qué extrañarse de que haya disidencias, como efectivamente las hay. Existen cuando el arco de organizaciones se abre para incluir todas las existentes en una sociedad como la boliviana. Es por ello que intentar “disciplinarlas” en función de lo que decidan los principales dirigentes político-

8 Probablemente desde Melgarejo en el siglo XIX y luego con la difusión del racismo con ropaje científico, el socialdarwinismo a finales de esa centuria, con su coletazo a inicios del XX, fueron los peores momentos de la relación con los pueblos indígenas en el periodo republicano.



ideológicos del MAS es nomás colonizarlas, como en cierto lenguaje de ecos anglosajones se denominan las injerencias ilegítimas de unas esferas o ámbitos sobre otras.

Fueron dirigentes indígenas de tierras bajas los que inicialmente enunciaron críticas del actuar intolerante del MAS contra organizaciones. Algunos fueron duramente castigados (es el caso de Marcial Fabricano, que fuera emblemático líder de la marcha de agosto-septiembre de 1990). Hoy es muy crítico Rafael Quispe, uno de los principales dirigentes del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), quien formula interpelaciones al oficialismo con gran precisión, pues está claro que algunos de ellos se asumen como ciudadanos organizados, gente que ejerce sus derechos políticos y no requiere dádivas o mercedes de los poderosos.

No es novedad que un partido mayoritario despliegue una voluntad hegemónica. Ya durante el proceso de la Revolución Nacional Zavaleta (1983) se preguntaba, entre retórico y sorprendido, ¿cómo era posible que “el MNR después de haber conquistado de verdad al pueblo, lo sobornó de inmediato...”?

Añadamos dos ilustraciones más de esta voluntad de copamiento. El mismo senador Ávalos anunció que los miembros más activos de la Unión Juvenil Cruceñista, que en el pasado cercano actuaron como grupo de choque contra los indígenas en la ciudad de Santa Cruz, fueron incorporados “al proceso de cambio”, es decir, a filas masistas. Aquí es donde uno entiende por qué Wittgenstein establece la homologación entre ética y estética. Otro ejemplo es la entrega de cheques a alcaldes de financiación venezolana en el programa “Evo cumple”. Rompe todo ordenamiento de finanzas públicas y de criterios tecnocráticos necesarios a escala estatal para ratificar la deuda (moral-espiritual) al caudillo que los reparte como cosa propia y personalísima. Si eso se compara con las acusaciones judiciales que recibieron el alcalde de Potosí y de Oruro de “daño al Estado”, es muy difícil no sentir empatía cívica por esos servidores públicos.

Hasta ahora hemos hecho referencia a la agobiante atmósfera de que sin el MAS no había futuro

posible, pero poco nos referimos a la intolerancia a los opositores formales a quienes judicialmente, con una norma inconstitucional (pues vulnera la presunción de inocencia y el requisito de previa sentencia ejecutoriada, Art. 28), se los sacó de escena⁹. Ahora es preciso decir sobre la cooptación o reparto de “pegas” en el mayor empleador del país: el aparato estatal. Escribo “pegas” porque ahí importa más tener un sueldo, mejor si se es “autoridad”, pero no tiene mucho que ver con tareas, funciones y menos con rendimiento y eficacia. Desde luego este mecanismo no es tema exclusivo del Gobierno. Pero con el amplio crecimiento del sector público, que se había logrado reducir en la estigmatizada era “neoliberal”, las posibilidades se incrementan, pues es sabido que el aumento de funcionarios públicos casi se duplicó desde que el MAS es Gobierno.

Aquí se juntan las ganas de comer con antojo: clientelismo y patrimonialismo; el tener un puesto pagado como resultado de formar en filas de los movilizados; hasta neutralizar al potencial incómodo o crítico, máxime si éste puede movilizar en la visible política en las calles.

⁹ La creciente sospecha de que no se trata de lucha contra la corrupción surge por cuanto esto no se aplica a ninguna ciudad o gobernación donde el MAS es titular del ejecutivo. En cambio no hay departamento o ciudad capital donde no haya ocurrido el enjuiciamiento: en La Paz al exalcalde Juan del Granado, exaliado y jefe del MSM, lo mismo que al alcalde Revilla; en Oruro a la alcaldesa Pimentel (también del MSM); en Potosí al que fuera alcalde elegido en las urnas René Joaquino; en Sucre del mismo modo al alcalde y a la exprefecta de Chuquisaca; en Cochabamba al exprefecto y excandidato presidencial Reyes Villa; en Tarija al gobernador refugiado en Paraguay; en Santa Cruz ya van varios alcaldes de la misma agrupación ciudadana del gobernador Costas retirados de sus cargos y sustituidos por masistas que perdieron las respectivas elecciones. Todavía en funciones aunque enfrentando juicios, en Trinidad, está el gobernador del Beni, con arresto domiciliario; y en Pando está el exprefecto, que fue el primero en caer, con el oscuro caso de lo que se ha llamado “masacre de Porvenir”, hecho del cual además de los muertos —cerca a una decena— hay decenas de refugiados en Brasil. La lista no es exhaustiva (ninguna mención a asambleístas o concejales, por ejemplo), sólo indicativa. En ningún caso sostenemos que son inocentes, judicialmente hablando (aunque algunas acusaciones son irrelevantes), sostenemos que tienen derecho a las garantías que la propia Constitución reconoce.



4. El desencanto: Gasolinazo y después

Como es conocido, entre las fiestas de Navidad y de Año Nuevo de 2010, se decretó una muy significativa elevación del precio de los hidrocarburos en el país, de proporciones mucho mayores desde que está vigente la política de subvención.

Entre los personeros de Gobierno y del partido predomina una lógica de guerra de cuño leninista, aunque a veces asume terminología gramsciana o postmoderna¹⁰. Asumir que esa misma lógica ha de seguir, es desconocer los avances que se han conseguido para humanizar la disputa política y entre cuyos resultados está la propia conformación del actual Gobierno y su indudable extracción popular.

Incluso con menor sofisticación lexicológica, la intuición de que la política es una “correlación de fuerzas”, un “tira y afloja” que es ampliamente compartido por el sindicalismo boliviano. El Presidente Morales es un eximio cultor de esa escuela, lo mismo que los cocaleros. Pero de manera más amplia, la lógica prevalente en la cultura política boliviana, como argüimos desde el primer apartado, es la política en las calles. Es verdad también que el “todo o nada” opera sobretodo discursivamente, pero hay que darle visos de verosimilitud que sólo se detiene —felizmente— ante la muerte.

El rol de cohesión que la oposición regional de la “media luna” había jugado hasta abril del 2010 ya no estaba presente. Eso abrió las puertas para la proliferación de las demandas sectoriales y la consiguiente dispersión de reclamos (Ferreira 2011). La forma específica y exitosa de política en las calles en tierras bajas ha sido la movilización en forma de “cabildos”, convocatorias para plantear consignas previamente acordadas por la dirigencia que preside los comités cívicos junto a los liderazgos políticos regionales¹¹.

El gasolinazo detonó la movilización donde destacó El Alto y sus organizaciones vecinales, pese a que el Alcalde de ese municipio era el anterior dirigente de la Federación de Juntas Vecinales. Pero no fue un escenario aislado. Los reportes de conflictividad de la Fundación UNIR para el mes de febrero y marzo constatan este punto de inflexión en continuidad con lo que se dio en enero, pese a la pronta abrogación del decreto que sustentaba legalmente esa alza de carburantes.

No parece haber duda de que la envergadura de la reacción popular fue espontánea. Quienes no están directamente beneficiados por puestos en el sector público, pero han apoyado reiteradamente al MAS, se sintieron agraviados. Proliferaron en las arengas escuchadas las calificaciones de “neoliberal” para el gobierno que la decretó. Pero también fue el momento en que el MSM, que había sido leal aliado hasta que el MAS, inconsultamente decidió prescindir de tal pacto para las elecciones subnacionales de abril de 2010. Como se sabe, el MSM enfrentó con éxito esos comicios, situándose como segunda fuerza electoral en dicha oportunidad.

El MAS había sentido el desgaje desde su autopercepción. Pronto el actual alcalde Revilla y su antecesor y jefe del MSM, Juan del Granado enfrentaron proceso judiciales. Ambos son abogados y del Granado es un político con larga trayectoria, con credenciales de lucha por la democracia y una gestión que en su momento halagó hasta el propio Presidente Morales hablando de “clonar” al alcalde para otros municipios del país.

En 2010 se resistió la arremetida judicial con una colecta pública para pagar una fianza requerida para que el alcalde Revilla se acoja a medidas sustitutivas a la detención. La colecta fue exitosa y previno a sus votantes de la judicialización contra los rivales del

10 Sólo a manera de ilustración, las referencias más propias de lenguaje belicista, véase García L. 2008 y 2009.

11 Por eso es tan poco claro el episodio de Eduardo Rosza Flores (héroe militar en la guerra de los Balcanes) y su gru-

po de mercenarios de origen europeo que fue abatido por un operativo policial en un céntrico hotel de Santa Cruz en abril de 2009. Hay evidencia de que no se trataba de un grupo de boy scouts, pero es también grande la sospecha de que había incentivos, además de penetración de la inteligencia del Estado, ajenos a la tradición política boliviana, que descabezó al sector más duro de la oposición política cruceña.



MAS. Con esos antecedentes no es difícil entender que el MSM vio ese momento como oportuno para señalar las inconsistencias ideológico programáticas del MAS y denunciar abiertamente el gasolinazo como atentado a la economía popular y demandar su abrogación, lo que ocurrió rápidamente, pues el presidente Morales tiene la experiencia para darse cuenta de que la medida era insostenible.

Son varias las encuestas que desde entonces señalan reiteradamente la baja popularidad del Presidente en comparación con sus rendimientos electorales y de popularidad hasta 2010. Como esa ha sido parte crucial de su fortaleza, no es descabellado pensar que esas consideraciones podrían explicar el brusco cambio de política en referencia a la importación de autos usados y legalización de los irregulares (“chutos”) que hoy está en primer lugar en las noticias. Llama la atención la relativa demora en la promulgación de parte del Ejecutivo, lo que unos interpretan como dar mayor tiempo a esa importación hasta hace poco ilegal (puesto que hay plazos perentorios para la regularización), y otros como señal de las disidencias internas entre sectores del gabinete ministerial pro-ecologistas y otros más pragmáticos, que son los que habrían impulsado el gasolinazo.

Cerremos esta sección con una interesante descripción de cómo estaría actuando el ámbito de las decisiones en el seno de poder político boliviano hoy. Es acuciosa la mirada de Fernando Molina (2011: 292 y ss.) cuando identifica al Presidente en su indiscutido papel de “líder”, de una “dirección” que articula “campos de poder tecnocrático” (en el puro sentido político del término) y círculos concéntricos para las formas de poder corporativo y finalmente los movimientos sociales. El peso específico del Presidente y su consabido entorno no respondería a ninguna estructura partidaria, sino al mérito de la proximidad del elegido. Podríamos matizar la nomenclatura, pero la imagen que comunica este autor, con experiencia en otro entorno que estudiamos como parte de la “democracia pactada” (Rojas O. 2009), nos resulta altamente convincente y ayuda a entender conductas y tendencias que en este último periodo serían inexplicables, dadas las bases sociales.

5.- Prospectiva: Inercia e incidencia

Inercia: como dijimos, el gasolinazo no fue la primera acción que las bases sociales del MAS sufrieron como ofensivas. Sin embargo, esa medida reinstaló la rebeldía y duda (ontológica, podríamos decir) sobre el poder estatal en la subjetividad de las bases donde un amplio conjunto se siente desoído. La palabra que usan los dirigentes populares es “traicionados” por Evo Morales y el MAS. A veces se olvida que los partidos de la “democracia pactada” (los tres principales) recibieron mayoritaria votación popular. Parte de su descrédito tiene que ver con los pobres resultados en el campo económico y social mientras ocurría el famoso “emponderamiento” político de los sectores rurales sindicalizados, indígenas y campesinos (Zuazo 2009) y otras organizaciones populares en las ciudades. Si se grafican los descensos en pobreza extrema en la primera década del presente siglo, se ve una mejora progresiva pero modesta (PNUD 2011), que no tiene un punto de inflexión como la retórica política podría sugerir.

El carácter defensivo de la política en las calles tiene evidentes limitaciones ideológicas y programáticas (como no sea el maximalismo retórico orden político propio, “nuestro gobierno-estado”, el “proceso-de-cambio” como sinónimo de revolución democrática y cultural). Allí es donde se reproduce la idea de exclusión que, explicablemente, portan los sectores que hasta entonces han tenido un carácter subalterno, quienes como los colonizados que estudió Fanon (1965), ven en la figura del colonizador la imagen del hombre libre... y reproducen sus prejuicios y actitudes.

Porque es bueno que sepamos que las actuales condiciones del escenario político alientan el recurso de la política en las calles, que también puede servir para dirimir conflictos entre particulares ante la evidente dificultad de gestionar o administrar conflictos desde el Gobierno. Tiene una concepción gloriosa de la política, casi enteramente entendida como confrontación entre enemigos, pero con grandes limitaciones para solucionar conflictos cotidianos, donde no existen culpables a eliminar —como quisiera una cara retórica revolucionaria— sino una administración ecuaníme de intereses



diversos.

Incidencia (redemocratizando políticamente). Entendemos aquí “prospección” como el ejercicio sobre el futuro vinculado a la preocupación por el destino de las sociedades. Por ello, nos planteamos cuestiones para incidir o afectar positivamente procesos en curso desde la labor crítica con una perspectiva más amplia que la de los inmediatos actores, que no tiene por qué ser complaciente. Allí están presentes desde luego elementos axiológicos, los ideológicos-partidistas se intentan morigerar al máximo.

El vínculo con sectores populares de la política de las calles tiene ya competencia allí donde el oficialismo se pensaba incuestionado. El MSM, que contribuyó a la movilización e impidió una arremetida oficialista contra el alcalde paceño, desarrolló el lenguaje que entiende el MAS.

Que el MAS haya dejado de monopolizar las calles, especialmente en el centro de La Paz y de Cochabamba, bastiones en apoyo electoral en los días más duros del fragor de la confrontación de 2005-2009, es una condición para democratizar políticamente al país. Porque a título de fuerza mayoritaria—que aquí no se discute—el desempeño luego de la “derrota” de la Media Luna ha avanzado crecientemente en negación de los derechos políticos de los opositores. Las discrepancias entre oficialismo y oposición son, desde luego, parte de la dinámica política, incluso dentro de estos mismos bloques. Lo que señalamos aquí es la descalificación que es seguida del acoso judicial, siendo muy dudosa la independencia de este órgano del Estado, cuando sus principales operadores (miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General y el Contralor General del Estado) recibieron nombramiento de la cabeza del Ejecutivo por periodos que exceden razonables interinatos. Hoy es parte de la agenda política de primer orden, la transparencia y constitucionalidad del proceso de selección de los candidatos a ser elegidos por voto popular. Como pocas veces, se ha cedido desde el oficialismo en modificar parte del polémico artículo de la Ley del Régimen Electoral, aunque se mantienen restricciones que quitan confiabilidad a este proceso.

Reiteramos que más allá del mérito de la resistencia que finalmente es la política en las calles, su plena vigencia significa que el procesamiento institucional de los conflictos no tiene cabida o es accesorio, o lo que es lo mismo: los conflictos se resuelven—hasta donde es posible usar esta expresión— en la pura confrontación de fuerza, violencia o con la amenaza de su uso. Eso no puede ser visto como desarrollo democrático y convivencia ciudadana.

De todo lo anterior, lo más importante es que se rompió el idilio del grueso de la ciudadanía, incluidos sectores sindicalizados, con la figura del Presidente Morales. Por ello vuelve la habitual turbulencia a la escena política boliviana que ya difícilmente podrá contenerse con el pretexto de “no hacer juego a la derecha” o con el miedo, que con razón opera en la mayor parte de los dirigentes opositores y disidentes. Pero eso sólo no garantiza un reencauce hacia la institucionalidad democrática, nunca bien consolidada aquí. Por ello es que no caben siquiera indicaciones a manera de orientar esfuerzos en alguna dirección.

La preferencia boliviana de movimientos por encima de partidos expresa la enorme desconfianza respecto de estructuras con claras líneas jerárquicas. Aquí cuestión de la concentración del poder no queda resuelta por los nominativos, aunque se puedan encontrar diferencias en el hecho básico de la existencia de jefes y caudillos. Por ello que más que laxas formas de organización, que buscan no entregar mando a eventuales “hombres fuertes”, hay que insistir en la conformación de organizaciones con reglas básicas y claras de orden democrático que incluyan direcciones colegiadas (como la idea de senatu, vid. *Infra*) y reconozcan la legitimidad de corrientes internas (disidencia leal). Es necesario desarrollar capacidades de hacer política con la disidencia, sin anularlos (al estilo MAS) ni subordinarlos (estilo “democracia pactada”). Desde luego, eso implica también que los contrarios también jueguen respetando esas reglas democráticas.

Una estudiosa andinista reconoció sin ambages lo que puede haber de aporte en lo que se presenta como democracia radical (Van Cott 2008), pero a la vez señaló el carácter sectario y poco respetuoso con la representación femenina y de minorías en



las experiencias de gobiernos municipales del MAS y el Mov. Pachakuti en el Ecuador hasta 2005. En nuestro caso ya en instancias nacionales, esto se ha ratificado ampliamente, más allá del cumplimiento no tan fácil de cuotas.

Otra estudiosa, que habría rechazado cualquier filiación feminista, como las etiquetas al uso de conservador/progresista¹², ha estudiado las dinámicas y orientaciones de dos revoluciones emblemáticas de la modernidad occidental, la norteamericana y la francesa. En efecto, Hannah Arendt (1973) se decanta por la primera por razones que vale la pena presentar brevemente aquí. Los norteamericanos fundadores del nuevo Estado buscan crear instituciones para la libertad, no como los franceses que aspiraban a resolver los problemas de la pobreza, a instalar la igualdad (material). Y no es que no le importe esa dimensión en la vida humana, pero privilegia la dimensión específicamente política que es la más propiamente humana, donde se genera un orden de autoridad que es resultado del actuar en común (poder) y expresa la ley como acuerdos de largo plazo (constitución)¹³. Preservado ese orden, es en el ámbito privado donde se resuelven los asuntos materiales, que ciertamente tiene sus dificultades y desafíos, pero esas prioridades son las que ayudan a comprender cómo el resolver (momentáneamente) las desigualdades materiales –como muchas revoluciones sociales modernas- no garantiza un orden de libertad y más bien devinieron en gobiernos autoritarios. A la inversa, la excepcionalidad norteamericana produjo un orden que perdura en el tiempo y se desarrolla con correcciones y ajustes en un proceso abierto. No hay sociedad con democracia (política) en mediano y largo plazo (medio siglo, ciclo Kondratiev) que no sea próspera económicamente; mientras que las experiencias (inicialmente) igualitarias inevitablemente derivaron

12 Empero se asumió como activista sionista cuando se perseguía y estigmatizaba a judíos: “Es estúpido (decir) ‘perdón, no soy judía, soy ser humano’” (Arendt 2005: 167). Inclasificable por su “pensar sin barandillas”, en esquemas dicotómicos, pues es -por ejemplo- una gran animadora de la discusión contemporánea sobre lo que llamamos democracia participativa y deliberativa.

13 Cita reiteradamente la máxima romana: potestas in populo, auctoritas in senatu.

en monopolios de poder de los “revolucionarios” y sociedades que implosionan.

Nosotros podemos usar la lógica, digamos andina, del antidilema, de la complementariedad y pugnar por ambas (la dimensión política y la económica); pero sería negar el legado de autoritarismo –caudillismo, clientelismo, patrimonialismo- que está demasiado vigente en nuestra tradición política. Es preciso disminuir, sino eliminar, el peso de la concentración del poder, efímera y sobre todo infértil. Es posible, en cambio, recuperar el espíritu de la lógica del turno, el famoso thakhi (camino) ya bien conocido de la alternabilidad del mundo indígena para los cargos de responsabilidad, para hacer del Estado el lugar que se comparte con los otros (no de exclusividad de nadie a priori) y desde allí desarrollar condiciones para economía emprendedora, que fomente distribución, pero que sepa nítidamente que hay que crear aquello a distribuir en un esquema donde los esfuerzos sean premiados y no sancionados, en una suerte de envidia institucionalizada (que busca igualar hacia abajo), de la que advertía Wolf (1955), ese especialista de los habitantes del mundo rural moderno.

6. Referencias. Bibliográficas

Arendt, Hannah. 2005. De la historia a la acción. Buenos Aires, Barcelona: Paidós- ICE/ U. A. de Barcelona.

Arendt, Hannah 1973. On Revolution. London, New York: Penguin Books

Argirakis, Helena. 2010. Ser cruceña en el gobierno de Evo. M. Svampa, P. Stefanoni y B. Fornillo. (Entrevistadores) Balance y perspectivas. Intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales. La Paz: Le Monde Diplomatique (Ed. Boliviana) y Fund. F. Ebert (FES).

Bustos, Miguel. 2011. La pirámide social y la nueva geometría en la mediación política. R. Cortez (Coord.) Claves de la transición del poder. La Paz: PNUD, Cuaderno del futuro 26.

Calderón, Fernando y Alicia Szmukler. 2000. La política en las calles. La Paz: Plural, CERES y UASB



- Fanon, Frantz. 1965. Los condenados de la tierra. México: FCE.
- Ferreira, Reymi. 2011. El gasolinazo tres meses después (II). La Paz: PNUD y fBDM. Conversatorio de análisis. Reproducido también en Nueva Crónica y buen Gobierno Nro. 83. La Paz, Inst. Prisma y Plural, abril.
- García Linera, Alvaro. 2008. Catastrophic equilibrium and point of bifurcation. Crítica y emancipación. Latin American Journal of Social Science. N. 1, year 1. CLACSO: Buenos Aires.
- García Linera, Alvaro. 2009. Estado plurinacional: economía y política. VV.AA. Poder y cambio en Bolivia 2003-2007. La Paz: PIEB.
- Kaplan, Marcos. 1984. Estado y sociedad en América Latina. México: Ed. Oasis.
- Maquiavelo, N. 2004. Los discursos de la primera década de Tito Livio. Buenos Aires: Losada.
- Mayorga, Fernando. 2007. Acerca del Estado plurinacional. Encrucijadas. La Paz: Gente común y CESU-UMSS.
- Molina, Fernando. 2011. El modelo de resolución política del MAS. R. Cortez (Coord.) Claves de la transición del poder. La Paz: PNUD, Cuaderno del futuro 26.
- PNUD 2011. Los cambios detrás del cambio. Desigualdades y movilidad social en Bolivia. La Paz, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia.
- Rojas Ortuste, G. 2009. Cultura política de las élites en Bolivia (1982-2005). La Paz: FES-ILDIS, CIPCA y CIDES-UMSA.
- Rojas Ortuste, G. 2001. Por qué el Mallku se yergue como el gran acusador: el movimiento étnico-campesino en el 2000 boliviano. Cuaderno de Trabajo .PNUD (ASDI y DANIDA)-Informe de Desarrollo Humano. La Paz.
- Van Cott, Donna Lee. 2008. Radical Democracy in the Andes. Cambridge University Press. New York.
- Viaña, Jorge. 2011. La compleja trama de permanente interlocución/ruptura de los movimientos sociales y el gobierno del MAS en Bolivia 2006-2009. R. Cortez (Coord.) Claves de la transición del poder. La Paz: PNUD, Cuaderno del futuro 26.
- Wolf, E. 1955. Types of Latin American Peasantry: A Preliminary Discussion. American Anthropologist 57:3, June, pp.452-71.
- Zavaleta, René. 1983. Las masas en noviembre. La Paz: Ed. La Juventud.
- Zegada, Ma. Teresa, Yury Tórrez y Gloria Cámara. 2008. Movimientos sociales en tiempos de poder. Articulaciones y campos de conflicto en el gobierno del MAS. Cochabamba y La Paz: Centro Cuarto Intermedio y Plural Eds.
- Zuazo, Moira. 2009. ¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia. La Paz: FES-ILDIS.

Siglas empleadas

ADN Acción Democrática Nacionalista (partido político)

CEJIS Centro de Estudios Jurídicos y Sociales.

CEPOs Consejos Educativos de Pueblos Originarios

CIDOB Central Indígena de pueblos del Oriente Boliviano

COB Centra Obrera Boliviana

CONALCAM Coordinadora Nacional para el Cambio

CONALDE Consejo Nacional por la Democracia

CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo

CPE Constitución Política del Estado

CSCB Confederación Sindical de colonizadores de Bolivia



CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

FEJUVE Federación de Juntas Vecinales

FNMCBS Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria

IOC Indígena Originario Campesino

LMAD Ley Marco de Autonomías y Descentralización

LPP Ley de Participación Popular

MAS Movimiento Al Socialismo (partido político)

MIR Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (partido político)

MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario (partido político)

MSM Movimiento Sin Miedo (partido político)

TCO Tierras Comunitarias de Origen

TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré.

UDP Unidad Democrática y Popular (Frente político)

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Pie de imprenta

Friedrich-Ebert-Stiftung Bolivia
Av. Hernando Siles C/14 Obrajes N° 5998
La Paz - Bolivia

ISBN: 978-99974-0-450-3
DL: 4-4-2732-18

Contacto

Tel: +591 2-2750005
Fax: +591-2-2750090
www.fes-bolivia.org
info@fes-bolivia.org
Facebook: Fundación
Friedrich Ebert Bolivia
Twitter: @BoliviaFes